

NACIONES UNIDAS
CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/1176
27 de febrero de 1975

ESPAÑOL
Original: INGLES/RUSO

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
31º período de sesiones
Tema 7 del programa

ESTUDIO DE LOS INFORMES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN CHILE,
CON PARTICULAR REFERENCIA A LA TORTURA Y OTROS TRATOS O CASTIGOS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

Carta de 26 de febrero de 1975, dirigida al director de la
División de Derechos Humanos por el representante de la
República Socialista Soviética de Bielorrusia en la
Comisión de Derechos Humanos

La delegación de la República Socialista Soviética de Bielorrusia en el 31º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, tiene el honor de pedirle se sirva distribuir como documento oficial de la Comisión, en relación con el tema 7 del programa de su 31º período de sesiones, el texto adjunto de la declaración final de la Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar en Chile, que se reunió en la Ciudad de México del 18 al 21 de febrero de 1975.

T. Antonovich

Representante de la República
Socialista Soviética de Bielorrusia
en la Comisión de Derechos Humanos

COMISION INTERNACIONAL INVESTIGADORA DE LOS
CRIMENES DE LA JUNTA MILITAR EN CHILE
Tercera reunión
Ciudad de México, 18 a 21 de febrero de 1975

DECLARACION FINAL

Durante su tercera reunión, celebrada en la Ciudad de México del 18 al 21 de febrero de 1975, la Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar en Chile examinó detenidamente una gran cantidad de elementos de prueba referentes al Gobierno de la Junta Militar en Chile. La Comisión oyó el testimonio de un gran número de testigos de Chile y de observadores y expertos de muy distintos países, y asimismo examinó informes, documentos y otros elementos de prueba presentados por escrito, así como diapositivas y películas cinematográficas de gran interés y gran valor.

Basándose en los elementos de prueba que le fueron presentados, y dado que sus miembros están de acuerdo en que es preciso exponer y denunciar los continuos desafueros y crueldades de la Junta Militar dictatorial de Chile, la Comisión formula la declaración que figura a continuación:

El derrocamiento del gobierno constitucional y el estado presente de la dictadura

Se ha comprobado que los oficiales que se sublevaron, acaudillados por el General Augusto Pinochet, derrocaron al Gobierno legítimo de Chile y causaron la muerte del Presidente Salvador Allende, habían empezado a conspirar para cometer un delito de alta traición ya antes del 11 de septiembre de 1973, día en que se produjo el golpe de Estado militar.

Los conspiradores estaban decididos a llevar a cabo su criminal propósito haciendo caso omiso de la voluntad expresada por el pueblo chileno. El asesinato en masa de ciudadanos indefensos e inocentes a que dieron rienda suelta tras el golpe de Estado fue claramente deliberado y calculado para aterrorizar al pueblo chileno y obligarlo a someterse a la dictadura militar.

Desde entonces la Junta ha mantenido su rígida dictadura. Los partidos de la Unidad Popular siguen siendo considerados "enemigos del Estado", se han suprimido todos los demás partidos políticos y toda actividad política es severamente reprimida por la Junta.

El Ministro de Justicia nombrado por la Junta ha manifestado sarcásticamente, que debería haber una ley para los opositores políticos de la Junta y otra para el resto de la población.

El "Estado de Sitio"

El 11 de septiembre de 1974 se declaró súbitamente terminado el "Estado de Guerra" inconstitucionalmente proclamado, y en su lugar se proclamó que Chile estaba bajo "estado de sitio decretado por conmoción interna (decretos ley NOS 640 y 641), fórmula desconocida hasta entonces e igualmente inconstitucional con que los siniestros Consejos de Guerra han conservado recios poderes reservados para las épocas de guerra.

Todo el procedimiento fue un mero juego de palabras encaminado a engañar a la fuerte opinión pública que había obligado a la Junta a renunciar al ficticio "Estado de Guerra".

Los desmanes de la Justicia

El imperio de la ley ha dejado completamente de existir en Chile. La Corte Suprema y los Tribunales de Apelación se niegan obsequiosamente a dictar autos de comparecencia -recursos de amparo- en casos de detención ilícita y arbitraria.

De este modo, los Consejos de Guerra siguen con su labor de represión sin restricciones. El General Sergio Poblete, uno de los acusados en los notorios procesos contra miembros de las Fuerzas Aéreas que fue terriblemente torturado, relató en su declaración el asombroso modus operandi de los Consejos de Guerra.

Los procesos se llevan a cabo sin oír testigos, se utilizan las confesiones de acusados torturados en contra de ellos mismos y se aplican retroactivamente los decretos de la Junta.

Desaparición de personas detenidas

La desaparición de personas detenidas es un aspecto del actual terror en Chile que causa particular consternación. Algunas organizaciones religiosas de Chile han podido reunir información sobre unas 60 ó 70 de éstas desapariciones al mes durante el primer semestre de 1974. Las autoridades de la Junta se han negado a proporcionar información alguna a tal respecto; por ejemplo acerca de David Silbermann, a quien según varios informes se había visto en condiciones físicas espantosas en campamentos e instituciones militares. No obstante, el 13 de febrero de 1975 no se sabía a ciencia cierta si estaba vivo o había muerto.

Las circunstancias hacen pensar que muchas de las personas desaparecidas han sido asesinadas. Por ejemplo, la Comisión ha recibido elementos de prueba respecto del Sr. Alfonso Carreño que fue asesinado en la oprobiosa Academia de las Fuerzas Aéreas y cuyo cadáver había sido entregado a su familia por los oficiales de esa Academia, dos días después de haber negado que estaba detenido.

Presos políticos

La liberación de Clodomiro Almeyda y otros presos políticos, así como la decisión de la Junta de no acusar a los dirigentes de la Unidad Popular y a los miembros del Gobierno del Presidente Allende de alta traición y otros delitos graves es un gran triunfo de la opinión pública mundial, del movimiento internacional de solidaridad con el pueblo chileno y de la acción preventiva llevada a cabo por la Comisión en su período de sesiones de emergencia celebrado en Copenhague.

Poco es el consuelo que se puede sacar de la liberación de presos, ya que inmediatamente se los destierra del país, lo cual constituye un castigo arbitrario.

Al mismo tiempo, la Comisión debe manifestar que la situación de los presos políticos es alarmante. La Junta retiene todavía un gran número de presos políticos que, según se calcula, pasan de 8.000 y entre quienes figuran muchos de los dirigentes políticos, como Luis Corvalán, Gustavo Ruz, Pedro Felipe Ramírez, Laura Allende, Aníbal Palma, Fernando Flores, José Cademartori y Bautista van Schouwen.

Las detenciones se hacen continuamente. En diciembre de 1974 y enero de 1975 se detuvo a unas 1.500 personas por razones políticas, como se comunicó en la reunión de la Comisión.

La opinión mundial obligó a la Junta a renunciar a su decisión de hacer procesos por "traición" y otros delitos graves a los dirigentes de la Unidad Popular. Era demasiado evidente lo absurdo de las acusaciones. En cambio, la Junta incoó proceso formal contra algunos miembros del Gobierno legítimo del Presidente Allende, bajo la falsa acusación de delitos tales como desfalco o irregularidades en la declaración de impuestos.

Los procesos, descritos durante la reunión de la Comisión por el Juez Olavi Heinonen de la Corte Suprema de Finlandia, que estuvo recientemente en Chile, tienen aparentemente por objeto desacreditar a los acusados y "justificar" y prolongar su ya excesivamente largo confinamiento.

Pero ~~contra~~ la abrumadora mayoría de los presos no se ha hecho acusación alguna, sino que se los tiene detenidos por razones preventivas solamente y por tiempo indeterminado. Su desesperación y su sentimiento de inseguridad quedaron demostrados en una película cinematográfica hecha clandestinamente en los campos de concentración de Pisagua y Chacabuca. Alrededor de la mitad de los presos entrevistados dijeron que no se habían metido en política, y ninguno de ellos sabía por qué lo habían detenido ni cuándo lo pondrían en libertad.

Varios testigos describieron asimismo detalladamente los horrores de interminables sesiones de tortura. Sus testimonios revelan una salvaje "ingeniosidad" para infligir sufrimientos insoportables a las víctimas. No sólo los métodos y los instrumentos utilizados son espantosamente crueles, sino que se tortura a las víctimas sea cual fuere su edad, su sexo o su estado físico.

Menosprecio de los derechos económicos y sociales

La usurpación del poder por la Junta ha detenido el proceso de progreso social que se había desarrollado en los tres años de gobierno del Presidente Allende. La inflación galopante y un enorme desempleo han sumido a Chile en una profunda miseria. Se ha dejado sin trabajo, sin la indemnización estipulada o sin jubilación a millares de chilenos despedidos u obligados a renunciar a sus empleos por razones políticas o de asociación con sindicatos.

Pese a graves dificultades financieras, la Junta ha convenido en pagar mayores indemnizaciones a las empresas extranjeras por los bienes nacionalizados. Al mismo tiempo, la Junta ha hecho entrega de la independencia económica de Chile, que el Gobierno del Presidente Allende luchó por asegurar, concediendo condiciones sumamente favorables a las empresas extranjeras en Chile.

De este modo los conspiradores, que se apoderaron del poder tan brutalmente diciendo que terminarían con el "caos económico" causado por sus aliados subversivos, no han conseguido administrar económicamente el país. Han privado a todas las organizaciones representantes del pueblo trabajador de la posibilidad de defender los intereses de los asalariados y de los consumidores. Esto ha llevado a la explotación despiadada del pueblo chileno en provecho de los industriales y propietarios de capital que habían apoyado los fines subversivos y hoy se esfuerzan por mantener en el poder a los conspiradores.

Menosprecio de los derechos de la mujer y de la juventud

Desde que las Naciones Unidas proclamaron el año 1975 como Año Internacional de la Mujer, la Comisión ha observado con especial interés la situación de las mujeres en Chile bajo la dominación de la Junta. Después de haber escuchado los testimonios, a la Comisión le resulta evidente que la Junta sigue una política de violación directa e indirecta de los derechos económicos y sociales de la mujer. Las mujeres están sujetas a represalias y sufren en su doble condición de miembros de la familia y miembros de la sociedad. No cabe duda de que la situación social de las mujeres cuyos maridos han sido ejecutados o encarcelados es desesperada.

Durante la reunión se puso especialmente de relieve la situación de la juventud y de los niños. Los testimonios demuestran que ni los jóvenes ni los niños escapan a la crueldad, que es el medio preferido de represión utilizado por la Junta. Se informó a la Comisión de casos de tortura y asesinatos de jóvenes.

En un documento presentado al "Consejo Social de Ministros" de la Junta se estima que en Chile hay más de un millón de niños necesitados de la "protección" del Estado, la mayoría de los cuales viven en condiciones de "suma pobreza". La Junta ha preparado planes para someter a "rehabilitación" a unos 600.000 de esos niños que se hallan en "situación irregular". Gran número de esos niños procedían de familias "en pugna con el orden social establecido", referencia clara a los hijos de partidarios de la unión popular, que han sido ejecutados o encarcelados.

La Junta ha propuesto llevar esos niños a campos fuera de los núcleos rurales o a centros especiales con fines de "corrección", con claras inferencias de orden ideológico y político. A la Comisión le preocupan gravemente esos planes de manipular la mente de la generación joven con el fin de crear esclavos obedientes de la Junta.

Envilecimiento y destrucción de la educación y la cultura

Aparte de que la educación se ha visto perjudicada desde el punto de vista cualitativo por la enérgica reducción del personal docente, el acceso a la enseñanza se basa en la discriminación por motivos de orden social y político. Las autoridades de la Junta han impuesto elevadas matrículas universitarias y exigen que el estudiante tenga medios de subsistencia como condición para asistir a la Universidad.

Decenas de millares de estudiantes han sido suspendidos o expulsados, dado que los establecimientos docentes están estrictamente regimentados, controlados y a cargo de militares. La policía patrulla en la Universidad, y policías de paisano y confidentes espían a los estudiantes en las aulas y otros lugares.

También se han introducido cambios drásticos en el plan de estudios. Las ciencias sociales han sido modificadas radicalmente y en la educación superior se ha incluido un curso obligatorio de "seguridad interior". La Junta impone asimismo sus ideas de tipo fascista y su pervertido nacionalismo en el sistema de educación.

Esas convicciones se reflejan asimismo en la política "cultural" de la Junta. Objetos de arte de valor incalculable, como murales y esculturas, han sido destruidos o confiscados, y se han quemado millones de libros, incluso obras maestras de los clásicos, privando así al pueblo chileno de su patrimonio cultural.

Injerencia de los Estados Unidos en Chile

Ya se ha reconocido oficialmente que, con autorización del "Comité de los Cuarenta" del Consejo de Seguridad Nacional, órgano gubernamental de los Estados Unidos, se proporcionó a la CIA una suma de 8 millones de dólares, por lo menos, que valía cuatro veces más en el mercado negro de Chile, para subvencionar las actividades subversivas en Chile.

Sin embargo, resulta evidente para la Comisión que los altos funcionarios de los Estados Unidos guardan en secreto importante información respecto de su actuación en el golpe de Chile. La misión subversiva de la CIA, que ha sido objeto de una gran atención del público, es el factor más tangible y sensacional en un plan bien coordinado y poderoso de subversión y de asfixia económica preparado por las instituciones públicas de los Estados Unidos y por las corporaciones multinacionales, también de Estados Unidos, recurriendo al bloqueo de los créditos y a represalias económicas con el fin de derrocar el Gobierno del Presidente Allende.

Las pruebas circunstanciales, como la aparición de funcionarios de los Estados Unidos en varios puntos estratégicos de Chile en el momento del golpe, y la intervención directa de la Marina de los Estados Unidos, ponen de manifiesto asimismo la complicidad estadounidense incluso en el golpe militar. Por consiguiente, no hay duda de que la injerencia de los Estados Unidos contribuyó efectivamente a derrocar al Gobierno del Presidente Allende y al establecimiento de la dictadura militar.

Esta intromisión en los asuntos de un Estado soberano supone una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios del derecho internacional, y representa una amenaza para la coexistencia pacífica de los Estados. Ningún Estado puede organizar, ayudar, fomentar, financiar ni instigar actividades subversivas en otro Estado. Tampoco puede la comunidad internacional tolerar que las empresas privadas se dediquen a actividades subversivas a través de las fronteras.

Los más altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos han tratado de justificar las actividades de la CIA y han señalado que no se puede descartar una actuación similar en el porvenir. Ese abuso de poder debe ser considerado como un gravísimo desafío a la comunidad internacional.

Sin embargo, es significativo que el Congreso de los Estados Unidos, con el apoyo de una masa cada día mayor de la opinión pública, haya tomado ya la iniciativa de investigar la participación de los Estados Unidos en los trágicos acontecimientos de Chile.

Aspectos jurídicos

Las atrocidades sistemáticas cometidas en Chile por la Junta militar, y en su nombre, son delito con arreglo al derecho nacional, y el pueblo chileno tendrá que castigar ese delito con la severidad que considere adecuada y justa.

Sin embargo, el terror que padece Chile no es una cuestión de incumbencia exclusiva del derecho de ese país, pues concierne a toda la humanidad desde los puntos de vista político, moral y jurídico. La protección de los derechos humanos interesa a la comunidad internacional.

Por consiguiente, no puede haber duda de que la comunidad de naciones debe hacer responsable a la Junta militar de sus generalizadas y sistemáticas atrocidades. Las graves acusaciones formuladas por diversos órganos de las Naciones Unidas, entre otros la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la última de las cuales fue de fecha muy reciente, el 21 de noviembre de 1974, son prueba concluyente a este respecto.

Sin embargo, no sólo debe hacerse responsable a la Junta de su total menosprecio de los principios humanitarios generalmente reconocidos, sino también, de no haber cumplido las obligaciones impuestas por tratados que la obligaban específicamente, es decir, los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.

A juicio de la Comisión, esas violaciones de los derechos humanos son tan graves que es lógico calificarlas de crímenes de lesa humanidad.

Los miembros de la Junta han incurrido en una grave responsabilidad con arreglo al derecho internacional. Ellos son sin duda alguna los principales criminales de Chile. Sin embargo, esto no exime de responsabilidad a los oficiales, soldados y carabineros que intervinieron en torturas y ejecuciones. El hecho de haber obedecido órdenes no es una excusa legítima. La inminente amenaza de una represalia severa se puede considerar una circunstancia atenuante en determinados casos pero la regla general está clara: los subordinados no deben ejecutar órdenes criminales.

El cuadro global de pruebas sometido a la Comisión pone de manifiesto un régimen de carácter terrorista evidente. La DINA, policía secreta de la Junta, es la ejecutora del régimen de terror de la Junta y sus métodos son comparables a los de la Gestapo. La multitud de crímenes cometidos por la Junta y su desafío a la democracia, se ajustan a una política evidente. El recurso al terror bárbaro como arma política, la instigación del odio de la gente contra los trabajadores, la preocupación exagerada por la banca y los industriales, la actitud superreaccionaria frente a la cultura, y la ideología nacionalista pervertida, tienen un parecido innegable con las dictaduras de Hitler y de Mussolini.

Por consiguiente, la Comisión no puede encontrar una forma más atinada de describir las características que se observan en el desarrollo de los acontecimientos que calificarlas de propias de un Estado de auténtico carácter fascista.

Con todo lo que representa, la Junta constituye un desafío para toda la humanidad y una amenaza al bienestar y al progreso de las naciones al que hay que responder resueltamente y con todos los medios a nuestro alcance. Aunque varios gobiernos han interrumpido sus relaciones diplomáticas con Chile, y las organizaciones internacionales han adoptado asimismo actitudes encomiables, es un hecho que las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales esperan todavía que se apliquen de manera eficaz sus resoluciones.

Para ello, la Comisión reitera con mayor insistencia aún los llamamientos que ha hecho a todas las personas y organizaciones, así como a todos los gobiernos y órganos internacionales, con objeto de:

- denunciar los graves crímenes cometidos por la Junta;
- condenar la intervención de los Estados Unidos en Chile;
- suspender inmediatamente todas las formas de apoyo a la Junta;
- suspender toda clase de relaciones políticas y diplomáticas con Chile;
- poner fin a todas las relaciones económicas y comerciales con Chile;
- aislar la Junta por todos los medios;
- prestar apoyo activo al pueblo de Chile, por todos los medios, en su lucha por restaurar los derechos humanos, el imperio de la Ley y la forma constitucional del gobierno;
- exigir que se ponga inmediata e incondicionalmente en libertad a todos los presos políticos, se cierren todos los campos de concentración y se ponga fin al "Estado de Sitio".